

Factorías del crimen: México y Colombia, oleadas o persistencia de la violencia

Crime Factories: Mexico and Colombia, Waves or Persistence of Violence

Alejandro García

Universidad de Murcia

RESUMEN

La ola de violencia que vive México, derivada del narcotráfico y con la frontera norte como epicentro, ha puesto de manifiesto patologías estructurales incubadas durante décadas: corrupción institucional, violencias soterradas y exclusión social. Ahora una novedosa gramática del terror busca disciplinar a la ciudadanía en la aceptación de un nuevo orden. ¿Se trata de un fenómeno temporal? La historia de Colombia muestra que la violencia no se desgasta, que puede operar como eficaz instrumento de modernización, de reorganización territorial y de estabilidad en la persistencia de un determinado orden social.

PALABRAS CLAVE: Violencia, México, Colombia

ABSTRACT

Mexico lives a wave of violence derived from drug traffic where the north border is point it out as the epicentre. This phenomenon has generated structural pathologies that during decades are endemic: institutional corruption, buried violence and social exclusion. Actually, a novel "grammar" of terror is trying to discipline the citizenship in the acceptance of a new order. Are we dealing with a temporal phenomenon? Colombia's history has been showing that violence never goes off and that it can work as an efficient instrument for modernization, territory reorganization and on the persistence of particular social order stability.

KEY WORDS: Violence, Mexico, Colombia

LA MUERTE TIENE PERMISO

Pocos imaginaron que tras siete décadas de monolitismo político y aparente paz social México se despeñaría hacia un mar de sangre. Las cifras de víctimas espantan, la espectacular saña de los asesinos perturba y algunas de sus ciudades, no solo Ciudad Juárez, son hoy símbolo de un nuevo tipo de holocausto. Esta mortandad a gran escala, que comenzó en 2006, invertía la tendencia sostenida hacia la reducción del crimen que se vivía en el país desde hacía quince años¹. Las magnitudes se dispararon desde que en diciembre de ese año un recién estrenado presidente, Felipe Calderón del conservador PAN, situó la guerra al narcotráfico como eje de su mandato, involucrando a las FFAA y sacándolas a las calles como fuerza policial. El número de víctimas habidas desde entonces probablemente nunca se sabrá (gobierno, medios y organizaciones civiles llevan su propio conteo), aunque Presidencia de la República en su informe sobre 2010 reconocía más de quince mil asesinatos ese año². Si a los *body count* disponibles se les suman los desaparecidos no denunciados enterrados en fosas ocultas, la cifra rondaría los 60.000 muertos en los últimos seis años.

¿Estaríamos, pues, ante un país en llamas? La complejidad de México requiere matices ya que son múltiples los mundos que lo habitan. Las extensas áreas mestizas del norte conviven con el comunitarismo indígena del centro y sur, los cinturones de miseria de los extrarradios con el alto consumo en los barrios exclusivos, el deficiente sistema educativo con centros de investigación pioneros, o los 150 dólares de salario mínimo al mes con los 6.000 de un funcionario de escala media-alta. Pero más allá de esta complejidad es un hecho que la escalada de la violencia ha acabado ocupando múltiples territorios, y que de los endemismos arraigados históricamente en Guerrero, Sinaloa o Michoacán se ha expandido a ciudades otrora enérgicas como Monterrey, Juárez, Tijuana o Guadalajara³, infiltrándose en el mismo cinturón suburbano de México DF⁴.

¹ Pasó de veinte homicidios por 100.000 habitantes en 1990 a poco más de diez en 2007 (Escalante, 2011).

² www.presidencia.gob.mx/voceria_seguridad/

³ "Jalisco la silenciosa disputa del narco" (Pérez, 2012).

Regiones enteras viven hoy bajo el imperio del crimen organizado, donde los medios de comunicación están silenciados, el poder judicial incapacitado y la policía trabaja al servicio de un mundo criminal que impone su canon de valores y exhibe rotunda fuerza mediante asesinatos espectaculares, secuestros y desapariciones forzosas, paralizando ciudades con bloqueos anulares que asfixian la actividad. Asentando la percepción de que se vive en una guerra irregular, de señales cifradas, que obliga a cambiar conductas y a modificar las relaciones sociales, pero también los usos privados.

Un primer relato nacido de los organismos estatales y aceptado por los media, que la repetición ha hecho inercial, entiende la violencia como inevitable producto de la guerra del Estado contra los poderosos carteles del narcotráfico: los criminales son apresados o muertos, los criminales asesinan a policías o los criminales se matan entre ellos para ocupar los espacios de las organizaciones desarticuladas. Es decir los muertos serían actores directos de la guerra, por tanto el ciudadano honesto nada habría de temer. Pero con los años este relato ha ido perdiendo fuerza en beneficio de una mirada más compleja, porque quienes mueren no son necesariamente pistoleros sino también gente corriente sin vinculación al crimen. Una primera evidencia indica que de los carteles centralizados de antaño fue surgiendo una galaxia de micro organizaciones, más o menos franquiciadas, que cambian de socios y lealtades a conveniencia y que no están ligadas solo a la producción y trasiego de droga, diversifican el negocio al secuestro, al robo a escala y la extorsión que asfixia a las PYMES. En cierto modo la violencia se ha ido “democratizando” y adquiriendo una fisonomía de guerra difusa con múltiples frentes internos, con reglas variables, objetivos diversos y actores heterónomos. Un lector atento podría ir armando el rompecabezas de los hechos:

Albañiles asesinados en masa en el DF ¿motivo? borrar indicios de los trabajos de construcción en casas de capos, en almacenes de acopio de drogas o en túneles transfronterizos. Descubrimiento de fosas comunes en Tamaulipas con cientos de inmigrantes centroamericanos secuestrados que no han podido pagar el rescate que los criminales exigían. Docenas de clientes quemados en el interior de un casino en Monterrey como “cobro” a unos propietarios que no han pagado la cuota de extorsión. Cadáveres de indigentes tirados en parques y basureros de las

⁴ El DF y el Estado de México que lo circunda no es una isla de paz como se ha insistido, sino un territorio donde el narcotráfico ha tramado más que en ningún otro conexiones con los más altos niveles de las instituciones políticas. Esto se desvela en la minuciosa investigación de Jiménez (2011).

ciudades, producto de escuadrones de limpieza social operados clandestinamente por fuerzas policíacas y militares⁵. Ejidatarios indígenas de Michoacán asesinados por las mafias madereras por oponerse a la tala indiscriminada de sus reservas forestales. Cientos de toxicómanos ametrallados en centros de rehabilitación de Ciudad Juárez, Durango o Torreón para silenciar vidas de gente que antaño trabajó para el crimen y posee información comprometedor. O guerras de apariencia anómala, como la vivida en Ciudad Juárez el año 2008 entre organizaciones criminales adversas (Linces y Aztecas contra Gente Nueva) que en realidad escondía una guerra entre las policías Federal y Municipal, alineadas en organizaciones criminales opuestas. Mujeres violadas y desaparecidas al amparo de una impunidad generalizada⁶. O el exterminio de familias vinculadas a la defensa de derechos humanos, caso de los Reyes Salazar en el Valle de Juárez.

Esta oleada de terror ha puesto, a su vez, de manifiesto la conexión medular de diversas instituciones del Estado con las organizaciones del crimen organizado. Las fuerzas policíacas son la despensa que provee de personal y protección a las organizaciones criminales, los surten de dirigentes sicariales, trabajan directamente como células de asesinos, ponen la información policial al servicio del crimen o se pasan en bloque como comandos de élite al servicio de los carteles (caso de los Zetas). Teniendo, además, en cuenta que en la misma cúpula de las FFAA hay generales que trabajan a su servicio⁷. Incluso en el ámbito de la justicia la penetración del crimen es un hecho, y no afecta solo a agentes judiciales, fiscales o jueces sino a las cabezas regionales de la Procuraduría de la República.

El informe de Human Right Watch del año 2011 ha señalado que en la guerra contra el narco todas las fuerzas de seguridad actúan irregularmente, detienen arbitrariamente, vulneran el derecho de habeas corpus y utilizan sistemáticamente la tortura. El informe constata que la escasez de denuncias es

⁵ “Federales y FFAA llegan a casas donde se cambian de ropa y salen a matar a quienes consideran escoria”. Testimonio de I. Alvarado, *El Universal*.

⁶ En los primeros cuatro años del gobierno Calderón se arrestaron unas 40.000 personas vinculadas al crimen de las que solo 269 han sido sentenciadas (Gutiérrez, 2010).

⁷ En 1997 el general división Gutiérrez Rebollo, máxima autoridad militar en la lucha antidroga, fue detenido por trabajar para la organización de Amado Carrillo. El año 2000 fue detenido el general Acosta Chaparro por conexiones con el mismo cartel en Sinaloa. En mayo del 2012 han sido detenidos los generales Ángeles, Dawe y Escorcía por estar al servicio de los Beltrán Leyva.

proporcional al miedo ciudadano a las represalias de los mismos cuerpos de seguridad. Y que existe complicidad generalizada en la tortura por parte del ministerio público, de los jueces y de los peritos médicos. Existe, según HRW, la sospecha fundada de que la fuerza pública está implicada en desapariciones forzadas (20.000 entre 2007 y 2010), habitualmente endosados al crimen organizado. Estos mismos cuerpos son responsables de un número indefinido de ejecuciones extrajudiciales, presentados como delincuentes, siendo habitual la manipulación de la escena del crimen (lo que en Colombia se conoce como *falsos positivos*).

ES LA HISTORIA

Con la corrupción instalada en el tuétano de los cuerpos armados México difícilmente podría resolver la guerra al crimen tal como fue planteada en 2007 porque, sencillamente, no disponía de instrumentos eficaces para ganarla. Por el contrario, el desborde de violencia hizo visibles debilidades estructurales y perversiones políticas arraigadas por largo tiempo, esencialmente referidas a la normalización de la violencia y a la corrupción matricial de las instituciones públicas

El historiador Alan Knight (1996) ha señalado con agudeza la esquizofrenia que habitó al país durante décadas: coexistiendo con el discurso de paz y consenso nacional (lo que él define como la política del *softball*) repetido por las cúpulas dirigentes surgidas de la revolución durante sesenta años, continuaría existiendo un “México bronco” (violento) en el subsuelo, en las periferias urbanas y en el campo (la realidad del *hardball*). Según ello la gran política nacional siempre destiló una retórica tranquilizadora y suave, que se expresaba en un espíritu de camaradería, la nación como familia y el presidente un padre. En esta narración persuasiva y patriótica, se exaltaban las tradiciones y los héroes, así como los logros. Se invocaba a Zapata y se valoraba la cultura indígena en tono magnánimo y reformista, con la premisa de que todos eran ganadores y el gobierno trabajaba para el bien común. El costo sería la adhesión pasiva y la deferencia a los dirigentes, precio a pagar para mantener estabilidad y orden. Lo que respondería a una alergia visceral al caos, al diferendo que pudiera romper al país y sumergirlo de nuevo en la violencia, es decir a la “aversión al conflicto” en palabras de J. Castañeda (2011).

Desde los años cincuenta habría desaparecido la violencia política entre las elites herederas de la revolución y los generales dejaron de matarse, el monolito institucional (PRI) estaba construido. Pero las bases siguieron matándose durante

décadas y la violencia (la realidad del *hardball*) estaba arraigada en el ámbito de lo local. Se trataba de un mundo distinto en el que se hablaba un lenguaje diferente y donde el caciquismo, clientelismo, soborno y violencia serían valores de uso. Era el ámbito de las elecciones amañadas, de los tribunales venales y de los ejidos ficticios, donde las venganzas se llevaban a cabo con eficacia letal y donde el recurso a las pistolas estaba más o menos normalizado. Este áspero ambiente en el ámbito rural perduró y coexistió con el discurso tranquilizador en el ámbito estatal contribuyendo a crear una ciudadanía escéptica que percibía el abismo entre retórica y práctica.

Es cierto que el sistema político mexicano evitó los horrores del militarismo autoritario que vivieron otros países de América Latina pero a cambio de desplazar el conflicto a la penumbra de la provincia, con lo que la estabilidad nacional siempre coexistió con focos de violencia y represión endémica (Knight, 2011). En regiones rurales como Chiapas, Oaxaca, la Huasteca o, sobre todo, Guerrero la alternancia de ciclos de protesta y represión hizo que nunca imperara la paz durante los años de gobierno del Partido/Estado, eso sí bajo una nube de bruma y aislamiento que mantenía a los habitantes urbanos en un limbo informativo. Solo en contadas ocasiones el músculo represivo del Estado se mostraría abiertamente, como en la huelga ferroviaria de 1959, en la matanza urbana de Tlatelolco (1968), en el asesinato a mansalva de familias disidentes (caso de Rubén Jaramillo en 1962) o en la “guerra anti subversiva” en Guerrero que durante los setenta se saldó con cientos de ejecuciones extrajudiciales y medio millar de desaparecidos (Sierra Guzmán, 2003).

Pero sería la corrupción institucional, anclada en los mismos cimientos del estado post revolucionario, el origen de las disfunciones más perturbadoras. Fue aceptado, ya desde los tiempos de Obregón, que política y negocios formaran una mancuerna, por tanto se hizo natural que los presidentes acumularan fortunas gigantes, con casos notorios como Abelardo Rodríguez⁸, Miguel Alemán o Carlos Salinas. Cada uno dispuso de su “recolector de ingresos privados” que drenaba la cuota presidencial con comisiones sobre negocios lícitos o partes recogidas de los ilícitos⁹. Asimismo los gobernadores de los estados, diputados y senadores

⁸ El caso de Abelardo Rodríguez es importante por tratarse de una experiencia seminal con todos los ingredientes de la desmesura (Gómez Estrada, 2002).

⁹ “Para el agente antidrogas norteamericano De Lagrave, el senador Carlos Serrano era The Collector of Private Revenue para el presidente Miguel Alemán (1946/1952), un puesto no oficial pero de gran importancia en cada administración. La mano de

federales reproducían en su ámbito el esquema presidencial. Un modelo que se replicó en todas las escalas del poder, de modo que los puestos intermedios en la administración acabaron siendo vendidos por cantidades exorbitantes con la seguridad de que sus ocupantes multiplicarían lo invertido¹⁰. Este sistema verticalizado convirtió a su vez a directores generales, jefes de sección, comisarios de policía, policías patrulleros, agentes judiciales, alcaldes y concejales o simples funcionarios de la administración en recolectores de ingresos privados con cuota fija que debían elevar a los superiores correspondientes. El ciudadano común siempre supo, por ejemplo, que los salarios de hambre en los cuerpos policiales debían ser compensados con ingresos de actividades ilegales o directamente con la extorsión, de la que él mismo era el objeto por antonomasia.

Desde muy temprano el contrabando fronterizo y el tráfico de drogas con los Estados Unidos fueron asumidos y reglados por el Estado como una mina financiera. En los años veinte el gobernador de Baja California, Esteban Cantú, fue el primero en integrar a la tesorería estatal (y personal) el contrabando de licor hacia Norteamérica, durante los tiempos de la ley seca, y también el opio que se procesaba de los cultivos de amapola en las sierras de Sinaloa y Durango. Pero conforme el régimen de Partido/Estado se fue asentando, la participación institucional en el negocio del narcotráfico fue centralizada por los servicios de seguridad. En 1947 se creó la Dirección Federal de Seguridad cuya función, además de eliminar la disidencia interna, consistía en regular y participar en el negocio del narcotráfico. “Según la inteligencia militar norteamericana la DFS se estaba convirtiendo en la ley en México. Los hombres que habían formado y dirigían la institución eran una colección inusual de políticos criminales, inescrupulosos y deshonestos y su poder venía de la relación estrecha de su director, Carlos Serrano con el presidente Miguel Alemán. Había sólidas evidencias de que los principales dirigentes de la DFS, además de obtener un poder tremendo, estaban incrementando sus fortunas mediante el uso de la corporación para encubrir sus operaciones de tráfico de drogas. El poder ilimitado de la DFS hacía de jefe el hombre más poderoso del país después del presidente. (Según el agente antinarcóticos Holden) cualquier organización de esta naturaleza, con poder de vida y muerte sobre los ciudadanos, y que protegía

Serrano estaba en todos los sobornos del país. En su opinión la cifra recolectada anualmente alcanzaba los 100 millones de pesos”. En Astorga (2003, p. 288).

¹⁰ José Reveles (2008, p. 181) relata un caso tipo, la venta de una plaza en la Policía Federal Preventiva por doce millones de dólares a un alto funcionario. Según la costumbre establecida en dos meses habría sacado el dinero.

a sus miembros de cualquier acusación ante los tribunales, no era más que una GESTAPO con otro nombre”¹¹.

En otra incisiva investigación el sociólogo Luís Astorga, ha señalado que fueron las instituciones el Estado quienes arbitraron, protegieron y se beneficiaron del tráfico de narcóticos implicando a la fuerza pública como garante disuasivo (Astorga, 2007). Cuatro habrían sido los tiempos en esta relación.

En el primero, el narcotráfico habría estado subordinado al poder político de los gobernadores de los estados productores y fronterizos. Ellos fueron pioneros en el negocio y señalaron las reglas del juego a los traficantes por las que, a pesar de estar en acuerdo con el régimen, estos quedaban excluidos formalmente de la política y asumían una posición subordinada que limitaba su capacidad para establecer las reglas del juego, pues sin protección institucional no podrían sobrevivir.

En un segundo tiempo, a partir de los años cuarenta, se crean mediaciones estructurales y centralizadas a través de la DFS y las corporaciones policíacas con atribuciones extralegales orientadas a proteger el negocio y al mismo tiempo contener a los narcotraficantes. En este periodo se asistió al incremento de la demanda de marihuana en el norte durante los sesenta, al comienzo de la “conexión Colombia” para traficar cocaína en los setenta y sobre todo a la creciente presión norteamericana que se concreta en la “Operación Cóndor” de 1977 en la que la DEA y el ejército mexicano ocupan Sinaloa, queman miles de hectáreas de cultivos y provocan un éxodo campesino sin precedentes campo/ciudad. Desde ese año Sinaloa deja de ser el epicentro del narcotráfico, las organizaciones regionales se fisianan y expanden a los estados vecinos, sobre todo a Guadalajara¹² (Jalisco).

La tercera etapa comenzaría con la tortura y asesinato por narcotraficantes de Enrique Camarena, agente de la DEA, en 1987. En respuesta la Casa Blanca aumenta la presión sobre México y consigue del presidente Miguel de la Madrid la disolución de la DFS, con lo que el Estado se ve privado del mecanismo que le permitía controlar centralizadamente el narcotráfico. El obligado encarcelamiento de los capos, que garantizaban la estabilidad y con los que había larga relación, genera un nuevo mapa de fragmentación criminal frente al que el

¹¹ L. Astorga, op.cit. pág. 286

¹² Miguel Ángel Félix Gallardo, patrón del narco, protegido por el gobernador de Sinaloa, Sánchez Celis, se traslada a Guadalajara desde donde organiza el nuevo mapa con la distribución territorial de los clanes.

Estado comienza a actuar también fragmentariamente. Coincidiendo con el principio de la erosión del poder político del PRI a fines de los ochenta, el Estado empieza a mostrar incapacidad para controlar sus propias instituciones de mediación y para hacer cumplir las reglas no escritas que habían regido el negocio: no muertos visibles, no drogas en las escuelas, entrega periódica de traficantes menores, derrama en las comunidades, que el dinero donado a las instituciones no implique tratos directos y que las estructuras sean centralizadas evitando la dispersión en bandas

El cuarto momento arrancarían con la salida del poder del PRI en el año 2000. El fin del régimen post revolucionario habría sido también el fin de los acuerdos informales centralizados y del arbitraje, por tanto traficantes así como cuerpos policiales ganaron en autonomía. Frente a un Estado debilitado las organizaciones criminales pasaron de la supeditación política a la confrontación directa, desatándose al mismo tiempo una guerra por el control de territorios y rutas.

COMO SIEMPRE, LA FRONTERA

Nadie como el clan de los Arellano Félix (CAF) de Tijuana anticipó, en la década de los noventa, las nuevas modalidades de la violencia que estaba por venir¹³. Para defender su monopolio del tránsito de drogas transfronterizo, el CAF fue el primero en romper con la antigua discreción de la época PRI apostando por la visibilidad de una violencia espectacular. Desde masacres a escala en ámbitos urbanos (El Sauzal de Ensenada en 1998), batallas con armamento pesado en aeropuertos que acaban con la vida de un cardenal (Posadas Ocampo de Guadalajara en 1993), pasando por un metódico exterminio de oponentes hasta hacer de Tijuana la ciudad con más asesinatos de México en esos años. Puso a su servicio a la policía municipal convirtiéndola en su brazo armado, obviando la mediación con estructuras superiores del Estado, lo que abriría una guerra interna entre municipales, estatales y federales. Comenzaron a ser asesinados, por primera vez, políticos, funcionarios judiciales, abogados y empresarios o periodistas molestos. Paralelamente el mercado local de consumo se amplió con nuevos miles de toxicómanos, esencialmente juventud pobre que a la larga

¹³ El semanario *Zeta* de Tijuana es un invaluable archivo sobre las andanzas de los Arellano Félix.

acabaría enganchada a los engranajes operativos del CAF¹⁴. Y sobre todo se levantó una red de corrupción que puso en nómina a funcionarios de todas las escalas y servicios, abogados, médicos, periodistas, etc. Tijuana era para el año 2000 la primera ciudad mexicana gobernada (o modelada) de facto por el crimen organizado.

Como lo fue en tiempos de la Revolución, de nuevo la frontera México/Estados Unidos sería el motor que arrastrara al país un nuevo periodo de violencia a escala. Una frontera que históricamente ha generado los flujos mas asimétricos del mundo como ya describió hace un siglo el escritor Martín Luis Guzmán: “Aquí llegan los gringos con su dinero y nos lo dejan para que compremos treinta-treinta y parque... aunque ahora caigo que comprándoles a ellos las armas vuelven a llevarse el dinero que momentáneamente nos traen. Claro que nos quedamos con las armas y nos destruimos nosotros mismos Los comerciantes de Arizona comprendieron pronto que la revolución mexicana los enriquecería, y se aprestaron a satisfacer nuestras necesidades. Los de Nogales nos equipaban para la vida y para la muerte, igual nos daban el vino que se consumía en las fiestas de la Primera Jefatura, que los tiros de bala de acero o bala expansiva para nuestras pistolas... de este modo los revolucionarios regresábamos del Nogales yanqui al Nogales mexicano con cuanto habíamos menester para seguir matándonos. Pero al propio tiempo el ganado de las dehesas sonorenses cruzaba la raya divisoria en un rebaño que no acababa nunca para ir a enriquecer a precio vil a los live-stock brokers del Far West”¹⁵

Como se sabe, el colapso a partir de 1993 de los carteles colombianos (Medellín, Cali y Norte del Valle) que controlaban el proceso integral de producción, transporte y venta en Miami o Nueva York de la cocaína recolocó a la frontera norte de México como centro en el negocio del narcotráfico. Fue la oportunidad para que los viejos traficantes de Sinaloa se hicieran indispensables como pasadores hacia los Estados Unidos. Los colombianos ponían la mercancía y los mexicanos la pasaban, las ganancias a medias. Según acuerdos al viejo estilo de la mafia, recomendados por el pionero Félix Gallardo, a principios de los noventa, tres familias sinaloenses se harían cargo de las tres grandes plazas de cruce: Tijuana para los Arellano, Ciudad Juárez para los Carrillo Fuentes y Nuevo

¹⁴ Tijuana tenía en el 2003 el mayor número de consumidores en el país (González, 2003).

¹⁵ Véase “Los rebeldes de Yankilandia”, en *El Águila y la Serpiente*. Aunque la primera edición de la obra es de 1928, la experiencia que inspira a Guzmán es su paso por el estado mayor de Villa entre 1912 y 1915.

Laredo (el Golfo) para García Ábrego. Pero el problema surgió cuando, imposible de aplicar ya el viejo principio de carteles centralizados con territorios definidos y bajo la cobertura del Estado/PRI, aparecieron nuevas organizaciones que desconocieron el reparto y también quisieron participar en el botín fronterizo. Primero el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada desde Sinaloa llevaron la guerra a Tijuana y Juárez para hacerse con ellas, después los Zetas, ex militares al servicio del Golfo, hicieron lo propio con sus antiguos patrones en Nuevo Laredo. A continuación la guerra se atomiza y surgen escisiones, como los Beltrán Leiva en Sinaloa o se extiende al interior donde aparecen nuevas organizaciones, como La Familia y Los Caballeros Templarios en Michoacán.

Además del gran negocio del cruce (la mercancía se multiplica por diez cuando pasa al otro lado) alimentador de codicia, corrupción, poder y guerra, la frontera norte llevaba veinte años de profundas transformaciones, con cambios sociales de hondo calado que habían remodelado el paisaje humano de ciudades y pueblos¹⁶, debilitando las relaciones sociales y ahondando hasta el abismo las diferencias económicas. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994 cientos de empresas transnacionales habían instalado plantas maquiladoras en las ciudades fronterizas, creando un orden neo hobbesiano, aplicando un capitalismo depredador del que Ciudad Juárez sería su epítome. Para estas empresas instalarse en Juárez resultaba un gran negocio, pagaban la décima parte de los salarios norteamericanos, no cotizaban impuestos, no estaban obligados a prestaciones sociales, no había límites horarios y el despido de trabajadores era libre, no creaban valor añadido y un probable cierre en el futuro dejaría tras de sí un territorio arrasado. También era una mina para las familias pudientes asociadas a los nuevos inversores, para los especuladores inmobiliarios, para los políticos que especularon con el nuevo ordenamiento urbano y para el Estado, que encontraba un alivio a la presión de las bolsas de pobreza en los estados del sur.

Pero la pujanza y exhibición de unos cuantos contrastaba con el disciplinamiento y estrés que pautaba la vida de los trabajadores en la nave industrial y con el mundo insalubre de una precaria existencia. Un estudio de la Universidad de Chihuahua reflejaba los cambios operados en la ciudad los últimos veinte años: su población creció un 150% atraída por la industria de la maquila con salarios un 30% inferior a la media nacional, nacieron decenas de barrios improvisados y fragmentados por un mar de dunas y basura, con servicios insuficientes, los

¹⁶ Natalia Mendoza Rockwell ha contado, desde la antropología, los cambios operados en un pequeño pueblo de la frontera de Sonora. Véase Mendoza (2009).

niños aprendieron a vivir sin sus padres (quince horas la media de ausencia al día) y a adueñarse de las calles. Los espacios públicos, plazas o parques dejaron de ser áreas de encuentro para ser percibidos como lugares peligrosos, los vínculos familiares se deterioraron, el abandono escolar creció (Jusidman y Almada, 2007) y los jóvenes construyeron sus vidas en las pandillas de las que nacerían más tarde organizaciones sicariales como Aztecas, Artistas Asesinos o Mexicles¹⁷. Más aún se agravaría el deterioro cuando por la competencia china y, sobre todo, por la crisis de 2008 comenzaran a cerrar maquilas y Juárez perdiera 100.000 empleos en diez años. A estos desempleados se sumarían los deportados que los Estados Unidos expulsaban diariamente por la verja, 800.000 en 2011, parte de los cuales renunciaban a regresar derrotados a sus pueblos, viviendo en precariedad extrema en las ciudades fronterizas: masa disponible dispuesta a todo para sobrevivir.

El desborde de la violencia comienza en Juárez en enero del 2008 cuando el ejército y la Policía Federal toman las calles de la ciudad y asumen la lucha contra el crimen, sustituyendo a los cuerpos policíacos tradicionales. Tras la entrada del ejército comenzó el exterminio de la policía municipal, en tres años murieron 150 agentes y medio millar abandonaron para integrarse, posiblemente, al mundo criminal. Los periodistas del *Diario* de Juárez, curtidos en el rastreo de las violencias urbanas, entendieron que la guerra que se iniciaba estaba produciendo un realineamiento de los actores: ejército y federales eliminaban a la organización de los Carrillo Fuentes (llamado Cartel de Juárez, hasta ese momento con el monopolio del narcotráfico en la ciudad) y a la policía municipal que era su brazo armado, con el apoyo (y la instrumentalización) de la emergente organización del Chapo Guzmán (Cartel de Sinaloa) que pretendía a su vez hacerse con la plaza. En esta guerra de hegemonías uno y otro bando crearon y armaron sus propios grupos criminales para operar en la guerra irregular. Al servicio de los Carrillo surgieron Los Aztecas, en el bando contrario Los Mexicles y los Artistas Asesinos. Mientras, ejército, federales y sicarios de su confianza creaban su propio escuadrón de la muerte conocido como Los Lince, con atribuciones varias: asesinato de policías, de pandilleros, de sicarios enemigos, de toxicómanos, de periodistas o de activistas sociales¹⁸.

¹⁷ Véase Sandra Rodríguez Nieto (2012b) para una exhaustiva crónica de las pandillas en Juárez.

¹⁸ Información recogida en la redacción de *El Diario* de Juárez, con especial agradecimiento a Sandra Rodríguez (*El Diario*) e Ignacio Alvarado (*El Universal*), junio 2011.

Las cifras de víctimas se hicieron escandalosas, de los 300 homicidios registrados el 2007 se pasó a 3.951¹⁹ el año 2010, con lo que probablemente estamos frente a quince mil muertos en la ciudad durante los últimos cuatro años. Con el denominador común de una impunidad sistémica, dado que solo el tres por ciento de los casos han sido instruidos judicialmente. La percepción de que matar era gratis en Juárez acabó por asentarse, produciendo, mas allá incluso, una intuitiva sospecha de que acaso las “normalizadas” e impunes violaciones y asesinatos de mujeres en los años anteriores no fueran si no un deliberado ensayo de disciplinamiento social que preparaba el terreno para lo que vendría mas tarde (Segato, 2004). Por otra parte la ciudadanía juarense ha sido testigo no solo de la parcialización de las FFAA en las disputas por el control del narcotráfico sino víctima de su conducta arbitraria, y rutinariamente ilegal. La periodista de Juárez, Sandra Rodríguez lo resume: “La experiencia de Ciudad Juárez con los patrullajes del Ejército, fue una violación sistemática de los derechos humanos que no habíamos visto en años, sabíamos que los policías eran corruptos pero con el Ejército vivimos un retroceso de décadas en materia de respeto a las garantías individuales y colectivas, no sólo se violaba el libre tránsito con la instalación de retenes militares, hubo cientos de allanamientos ilegales –sin órdenes de registro-, detenciones sin órdenes de aprehensión ejecuciones extrajudiciales, una violación sistemática a los derechos humanos” (Rodríguez, 2012a).

Generalizada la impunidad y sin un monopolio legal de la fuerza en Ciudad Juárez comenzaron a emerger múltiples violencias transversales sostenidas por una expansiva democratización de las armas²⁰. Los crímenes por la disputa territorial entre las organizaciones del narco empezaron a ser solo una parte de la guerra. Los empresarios acosados por la delincuencia financiaron sus propios escuadrones para matar ladronzuelos. Grupos uniformados de apariencia militar secuestraban y desaparecían a cientos de personas, especialmente jóvenes. En los centros de desintoxicación se cometían inexplicables masacres. El gremio del desguace y venta chatarra de coches fue especialmente castigado por su relación con el robo de autos y la economía ilegal²¹. El pago en extorsión por protección criminal, “derecho de piso”, se hizo obligado para todo negocio, bajo pena de

¹⁹ Informe de la Procuraduría General de la República 13/3/2011.

²⁰ En una singular narración entreverada de etnografía, historia y crónica Charles Bowden describe como la violencia está modelando los comportamientos urbanos. Véase Bowden, 2010.

²¹ En Juárez se roban mil coches al mes, los desguazan en “deshuesaderos” (yonkes) y estos venden el metal a Ecorec, una empresa legal que tiene el monopolio en la ciudad.

muerte. Jóvenes toxicómanos surtidos en alguno de los cuatro mil picaderos de Juárez morían a manos de pequeños distribuidores por deudas insignificantes (“a veces por cantidades insignificantes, 200 o 500 pesos”). Y en la periferia de la ciudad, en los pueblos del Valle de Juárez, antiguo fértil emporio algodonero, la muerte había desolado comunidades tradicionalmente prósperas como Práxedes, El Porvenir o Guadalupe. En esta última un diez por ciento de su población había sido asesinada, como demuestra en su riguroso conteo Saúl Reyes Salazar, sobreviviente de una familia local a la que habían asesinado seis de sus miembros. Con tres mil habitantes, en Guadalupe hubo 180 asesinatos, 26 desaparecidos y 8 cadáveres no identificados. “Algunos eran ladronzuelos, otros narcomenudistas, esposas, profesores, albañiles, panaderos, campesinos o políticos. Algunos eran niños y otros ancianos, familias enteras habían sido diezmadas, incluyendo a las más antiguas del pueblo: los Escajeda y los Gándara. La guerra había cobrado una cuota muy alta, pero lo que seguía en pie era el negocio de la droga. Mientras tanto Gabino Salas dirige la plaza del Valle de Juárez para el Cartel de Sinaloa y un nuevo jefe ha tomado el mando local del Cartel de Juárez. Al pueblo la gente le dice simplemente La Muerta” (Del Bosque, 2012).

DISPERSIÓN Y ASIMILACIÓN DEL TERROR

En México sobrevivieron enquistados endemismos donde la violencia siempre fue una experiencia de vida, como el Guerrero campesino con las mayores tasas de homicidios en el país desde la Revolución, las “repúblicas marihuaneras” de Michoacán donde en décadas los usos de vida fueron regidos por la cofradía del silencio y la sangre, o el “triángulo dorado” (frontera de Sinaloa, Durango y Chihuahua) donde desamparo y pobreza abrieron la puerta a la amapola y normalizaron desde los años cuarenta la ilegalidad reglada por la ley del talión. Igualmente los mexicanos siempre supieron que vivían en un país con altas tasas de criminalidad²². Pero la explosión del conflicto en la frontera desbordó las cifras y acabó desparramando la violencia por el país y homogeneizándola más allá de sus particularidades de origen. Desde 2008, ciudades antaño blindadas han sido abducidas por ese agujero negro.

Según un estudio de Eduardo Guerrero (2012) la distribución territorial de los 16.600 asesinatos contabilizados el 2011 confirma la dispersión de la violencia a

²² Elena Azaola (2012) ha resumido cifras e interpretaciones que exhiben su persistencia endémica.

través de un significativo efecto ósmosis. Mientras que en las seis principales ciudades de los estados fronterizos las tasas de homicidios disminuyeron una media del cincuenta por ciento en relación al año anterior, en otras seis (todas nodos vitales de industria, servicios y turismo) se dispararon: Acapulco (147%), Monterrey (165%), Veracruz (1961%), Durango (217%), Zihuatanejo (670 %) o Guadalajara (142%).

A diferencia de Colombia, donde las organizaciones criminales ha tendido a camuflarse como actores del conflicto armado nacional (no olvidemos que grupos paramilitares como las AUC responsables de ciento cincuenta mil asesinatos bajo la coartada de la guerra anti subversiva eran en realidad organizaciones mafiosas recicladas), en México los actores del crimen desprecian cualquier justificación de índole religiosa, étnica o política. Su razón de ser, y así lo hacen ver, es la conquista de dinero y poder mediante una acción expedita y lo más mortífera posible. Un arquetipo de ello serían Los Zetas que proceden, no de áreas donde las violencias eran una experiencia de vida, sino que nacen como proyecto ideado para conquistar territorios e imponer un nuevo orden, su orden, a través del crimen. Organización piramidal con cúpula de mando militarizada y cientos de franquicias a las que controlan con la ley del hacha. Surgidos como subproducto militar del narco lo han trascendido para diversificarse en múltiples facetas criminales y empresariales: controlan el menudeo, cobran impuestos vía extorsión, tienen una lucrativa sección de secuestros, asesinan por encargo, masacran a inmigrantes centroamericanos que no pueden pagar su rescate. Crimen en estado puro que a su vez redistribuye capital en políticos, policías y abogados que acaban incluidos en la red con el objetivo de instaurar un gobierno paralelo, lo que Grayson y Logan llaman una “zetanización” de México²³.

Los Zetas, como el resto de las organizaciones criminales, son redes voraces que, dada la letalidad del oficio, necesitan perpetua reposición humana, sobre todo en las escalas operativas: distribuidores, halcones, dedos, cobradores de piso, asesinos, descuartizadores o grafiteros. Y por debajo de ellos millares de otros individuos (acaso millones) deben, igualmente, arriesgar sus vidas sembrando, cosechando, procesando, empaquetando o vendiendo marihuana, cocaína, heroína y anfetaminas. La masa disponible para que esta maquinaria funcione se encuentra entre los millones de personas que sobreviven en la pobreza o que se sienten socialmente excluidas y se ofrecen a ser admitidas de pleno derecho.

²³ George Grayson y Samuel Logan han escrito la más exhaustiva narración sobre Los Zetas. Véase Grayson y Logan (2012).

En este punto conviene examinar algunas cifras sobre las expectativas personales de la gente y la realidad social y económica que el país les ofrece. La primera es que México es incapaz de generar el millón de puestos de trabajo anuales que requiere la demanda (en 2012 se crearán medio millón si se crece al 4%, según un Informe del Banco de México). Por su parte el informe de CEPAL *Panorama Social de América Latina 2011* señala que México es el único país del continente (junto a Honduras) donde aumentaron la pobreza (del 34.8% al 36.3%) y la indigencia (del 11.2% al 13.3%) entre 2008 y 2010. En relación a la población juvenil el Consejo Nacional de Población ha informado que en 2010 más de 3.7 millones de niños no fueron a la escuela y que siete millones de entre 18 y 29 años ni estudiaban ni trabajaban. Pero es en el informe de la OCDE del 2011 donde el abismo social resulta más claro, mientras que entre los países miembros el promedio de ingreso del 10% de la población más rica es de nueve veces el ingreso del 10% más pobre, en México la diferencia es de 26 veces, lo que lo convierte en el segundo país con más desigualdad de la organización (OCDE, 2011). Y como ya advirtió la OMS en su *Informe Mundial sobre la Violencia* (2002), existe una estrecha correlación entre violencia y desigualdad, y no tanto entre violencia y pobreza, como confirma el que los países mas igualitarios tienen menores tasas de violencia. Según la psicóloga Elena Azaola, “la tensión que genera la desigualdad es siempre muy alta y produce la sensación de que no hay juego limpio. Las grandes desigualdades son un destructor de capital social, crean desconfianza, cinismo, falta de interés asociativo o apatía y quienes delinquen resultan tener débiles vínculos con la sociedad”²⁴

Ahora bien ¿el solo resentimiento puede llevar a multitud de jóvenes a reconstruir sus vidas en un orden alternativo de sangre y nihilismo? Donde, por ejemplo, un joven de apariencia afable relata con naturalidad familiar como torturó y asesinó a un secuestrado²⁵. U otro grupo de jóvenes que torturan y asfixian a cuarenta para tirarlos en una calle de Boca del Río, Veracruz²⁶. O el secuestro de 49 personas al azar cuyos cadáveres descuartizados son arrojados a las calles de Cadereyta para culpar a sus oponentes²⁷. O el Ponchis, un niño de trece años, que ha degollado frente a la cámara a cuatro personas. Donde un individuo como el Pozolero, que ha disuelto en ácido a trescientos humanos responde al ser detenido que lo que hace “es un trabajo como cualquier otro”²⁸. O

²⁴ E. Azaola, op.cit.

²⁵ [youtube.com/watch?v=oFurLcB5i1M](https://www.youtube.com/watch?v=oFurLcB5i1M)

²⁶ *La Jornada*, 21 de septiembre 2011

²⁷ *El Universal*, 22 de mayo 2012

²⁸ *El Universal*, 23 de enero 2009

la puesta en circulación a través de la red de cientos de videos grabados de interrogatorios que acaban con decapitaciones en directo. Cuadros recogidos al azar que sintetizan miles de otros cuadros.

El crecimiento de la pobreza y la exclusión, mas el quiebre institucional y la impunidad, sería el caldo de cultivo propicio para que el narco realizara un trabajo callado y eficaz, reclutando un ejército de jóvenes empobrecidos y resentidos que ofrecen su único valor: “correr riesgos”, un capital codiciado por el crimen organizado. A cambio de reconocimiento, pero también de identidad y seguridad. La antropóloga Rossana Reguillo ha contribuido a dar cierto sentido a lo que en apariencia es ininteligible. Según ella más que de violencia habría que referirse a “gramática de las violencias”, pues esta no puede ser enunciada en singular ya que son múltiples sus formas y lenguajes. Es decir que a pesar de su exhibición, la violencia del narco es una más de la galaxia de violencias que habitan México, la doméstica, la del machismo criminal, la exhibición impúdica de riqueza, la derivada de la corrupción en todos los ámbitos de la institución pública, la de un ejército corrupto y represivo, la de una policía al servicio del sicariato. Por tanto, no se trata de un fenómeno exterior a lo social, “está dentro, aquí, dando forma y constituyendo eso que llamamos sociedad”. La novedad en este caso es el mensaje de su ergonomía, lo que Reguillo llama violencias disciplinantes, o pedagogía del miedo. “Es decir aquellas que despliegan los signos de su poder para marcar sobre cuerpos y voluntades, el designio de su propia racionalidad. Someter por miedo, mediante una caligrafía brutal que señala un poder total. Los códigos narcos operan bien esta economía simbólica: te martirizo a ti para que otros entiendan el lenguaje. Se puede constatar la estrecha relación entre estas violencias disciplinantes y la necesidad de los jóvenes de construir sus biografías en contextos de mayor estabilidad, con certezas de lugar, lealtades y solidaridades, garantías (aunque sean inestables) y reconocimiento. Cuesta aceptarlo pero el narcotráfico es capaz de ofertar todo esto” (Reguillo, 2011).

La violencia, y esto sería una novedad del tiempo, ha emergido como lengua franca en el momento en que colapsan el lenguaje convencional, los sistemas de representación y las instituciones, transformándose en narrativa que todos entienden, en la que otros se expresan y a la que las fábricas semióticas han contribuido a normalizar. Un ejemplo de ello sería el relato de la violencia que producen los medios, donde se observa una suerte de narcisismo narrativo que los lleva a recrearse en detalles no trascendentes pero de impacto literario. Resulta significativo, por ejemplo, la ridícula prolijidad al reseñar los hechos de violencia: modelo y año del auto implicado, calibre de la munición, tipo de armas

usadas o marca de ropa de las víctimas, desinteresándose de lo esencial: quien y cuál era el pasado de la víctima. O la rutina banalizadora de los sucedáneos lingüísticos que convierten al asesinato en “ejecución”, al secuestro y desaparición en “levantón” o a los decapitados en “piñatas”.

SOBRE PERSISTENCIAS: UNA ENSEÑANZA COLOMBIANA

Cabe, pues, preguntarse si lo que hoy vive México es una oleada criminal que remitirá a medio plazo, o por el contrario se está apuntalando un nuevo orden integrado de múltiples elementos, de largo recorrido y desenlace imprevisible. Inevitablemente, para encontrar indicios miramos a Colombia por razones obvias: ambos países son partes complementarias del circuito narco, los dos sufren masiva corrupción institucional asociada al crimen, tienen cifras similares en índice de desigualdad y exclusión y los dos son aliados estratégicos de EEUU suscritos en bilaterales, Plan Colombia (desde 1999) e Iniciativa Mérida (desde 2008).

Bajo el significativo título de “¿Puede México ser Colombia?”, Fernando Escalante (2009) ha ensayado algunas comparaciones. Partiendo de tres nodos comunes (debilidad del Estado, organizaciones criminales poderosas y presencia más o menos asentada de grupos guerrilleros) resalta en cambio las diferencias en los procesos de violencia en ambos países. Comenzando por los escenarios, señala que en Colombia la violencia tiene un origen rural, mientras que en México se desarrolla esencialmente en ámbitos urbanos. Allí la violencia estaría entreverada de apelaciones políticas, con fuerte presencia al inicio de las guerrillas y después de grupos paramilitares en las áreas de producción de narcóticos, mientras que aquí la violencia es mas dispersa, ajena a lo político y un fenómeno de estricta índole criminal. Al examinar los procesos históricos en la formación de los Estados, integración territorial y unificación política, es donde las diferencias resultan más elocuentes, mientras en Colombia el Estado nunca acaba de controlar el espacio, las periferias son áreas en disputa y la violencia funciona como “producción de orden”, en México no hay espacios vacíos y el Estado funcionó durante décadas como mediador, e integrador, social. En el caso de México estaríamos, pues, frente a un fenómeno del tiempo, bajo el influjo de una oleada de violencia ocasional derivada de la desregulación sobrevenida con la desaparición del PRI/Estado.

El diagnóstico de Escalante es verosímil, pero el augurio que desprende a partir de la especificidad mexicana requiere matices, y la historia reciente de Colombia puede darnos algunos. El principal es que los colombianos han sido disciplinados

y modelados, en lo público y lo doméstico, por la violencia desde hace por lo menos seis décadas. Y no siempre con explosiones espectaculares, sino combinando fases, con cambio de actores, saltos territoriales, momentos pico y relativos reflujos. La primera gran lección, la que marcó a la gente, fue la Violencia de los cincuenta: en un país desvertebrado las elites de Bogotá, unos por miedo a la plebe (conservadores) y otros por pusilánimes (liberales)²⁹, provocaron una guerra civil en el campo en la que 250.000 personas perdieron la vida, la mayoría campesinos asesinados por otros campesinos con la participación policial y militar³⁰. Se trató de una violencia de alta carga simbólica en la que la muerte no era suficiente, se exhibían sofisticados cortes a machete, decapitaciones, descuartizamientos, evisceraciones, asesinato de niños expuestos para uso pedagógico (el mismo aprendizaje que compartiría el sicario mexicano Beto con la antropóloga Reguillo: “en este jale ya no basta con morir”). De aquel episodio los sobrevivientes aprendieron que el Estado no era árbitro sino parte, además nunca reconoció a las víctimas ni las resarcó, y fue marrullero cuando con falsas promesas de amnistía atrajo y ejecutó a cientos de los que se entregaron. La Violencia, que se había concentrado en las zonas más productivas del país, generó además un éxodo masivo hacia las selvas y territorios baldíos donde los refugiados buscaban protegerse a sí mismos, lejos del Estado (de nuevo “cien años de soledad”). Este éxodo fue clave para la historia posterior por dos razones, la primera porque Colombia se abrió demográficamente llenando sus inmensos huecos territoriales y sobre todo porque en estos espacios colonizados se tramó una nueva sociabilidad, lejos del Estado y ajena a los flujos de la política nacional entonces monopolizada por el Frente Nacional (alternancia entre liberales y conservadores).

Cuando en los años setenta aparecieron en estas regiones las FARC, eran tierra abonada para que la guerrilla fabricara orden donde antes reinaba el caos. Por ejemplo, los campesinos de La Corcovada, en las selvas del Magdalena Medio, recuerdan las palabras del comandante guerrillero Ricardo Franco en su primer encuentro: “Venimos a acompañarles, a que vivan como personas y no como animales olvidados ¿cuáles son sus problemas y en qué podemos ayudarlos?”. En los veinte años siguientes la guerrilla echó raíces y acabó por extenderse a toda la Colombia rural, funcionando como garante de un nuevo contrato social. Fueron tiempos que hoy alimentan ciertas añoranzas: “por primera vez sentíamos que

²⁹ En un agudo análisis Herbert Braun (2004) ha contado cómo se tramaban las relaciones de deferencia entre campesinos liberales y sus dirigentes urbanos.

³⁰ La obra clásica sobre La Violencia, y la mejor, sigue siendo la de Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna (1962).

alguien se ocupaba de nosotros”³¹. Pero en la inevitable disputa por la soberanía territorial con la guerrilla, las instituciones estatales operaron bajo el implícito de que la población que sostenía el “orden FARC” eran enemigos, si no bandidos, con lo que millones de campesinos se sintieron una vez más excluidos y criminalizados. En los más de cuarenta años de guerra a la guerrilla el Estado colombiano demostraría ser un pésimo ejemplo de racionalidad, legalidad o equidad. En 1964 con el improvisado y sectario bombardeo a Marquetalia contribuyó a extender la insurgencia al país, en los setenta carnetizó a la población del Magdalena Medio y del Urabá con masivas violaciones de derechos y el asesinato de miles de campesinos, en los ochenta alentó la creación de un ejército paramilitar que acabaría asesinando a cientos de miles y en la primera década de este siglo sería responsable de esa aberración conocida como “falsos positivos”.

En este contexto de paralegalidad surge en los años ochenta el narcotráfico, primero como fenomenología urbana, después incrustándose en el campo. Para los campesinos cultivadores la coca significaba una esperanza de abandonar la pobreza, para los jóvenes urbanos un ascensor social en un país con estratos sellados, para el empresariado tradicional una inyección de *cash*, para los políticos una chequera con la que financiar sus campañas, para el funcionariado corrupto un sobresueldo a cambio de servicios y para los capos una ilusión de aceptación social y poder que los llevaría a la tumba. En términos de violencia, el narco no inventó nada que no se hubiera vivido en Colombia, se insertó como uno más en los variados conflictos del país, aunque a la larga acabara como vector horizontal en todos ellos. La novedad que aportó fue el traslado de la violencia a las ciudades, que hasta ese tiempo habían vivido relativamente ajenas, y sobre todo incluir entre las víctimas por primera vez a los intocables de la elite tradicional, con casos notorios como Lara el ministro Bonilla (1984), el patrón de los medios Guillermo Cano (1986) o al nuevo repuesto de la elite liberal Luís Carlos Galán (1989). Todos ellos, y algunos más, asesinados por Pablo Escobar y sus socios por una inapelable razón: “Para que aprendan a respetar”. Respeto hacia los de abajo, que fue desde otro ángulo el reclamo siempre esgrimido por la

³¹ En 1993/95 recogí en la cuenca del Carare cientos de testimonios sobre los primeros años de las FARC en la región. Véase el cap. “La pax guerrillera” en Alejandro García (1996).

guerrilla y explicado en el Caguán en la carta con la que Manuel Marulanda justificaba su ausencia en la cita con el presidente Pastrana en enero de 1999³².

En Colombia, dado que nunca se cultivó la hoja de coca, el narcotráfico nació con genuina vocación empresarial, se compraba la hoja en el Chapare o Alto Huallaga y en Colombia se transformaba en clorhidrato y se exportaba. Los primeros narcos fueron empresarios (los Rodríguez Orejuela o los Ochoa por ejemplo) que con discreto perfil crearon sofisticadas ingenierías financieras de lavado e inversión. Pero también entró gente para quien la cocaína significaba millones en efectivo, poder armado, extravagancias consumistas o fincas de cinco mil hectáreas, como Pablo Escobar de Medellín o Rodríguez Gacha de Cundinamarca. En 1984, cuando Colombia aprueba el tratado de extradición a EEUU, mientras los narco/empresarios se esfuerzan por mantener el anonimato, los jóvenes condotieros, con Escobar al frente, plantean una espectacular guerra al Estado en la que todo vale: asesinatos de parte y parte (probablemente quince mil), demolición de edificios (atentado a la sede del DAS en 1989), magnicidios políticos (Galán, Jaramillo, Pizarro) derribo de aviones civiles (vuelo de Avianca en 1989 con 101 víctimas). Para destruir la organización de Escobar, convertido por los medios en imagen del mal absoluto, se forja una alianza entre instituciones públicas (servicios de inteligencia, policía y FFAA) y organizaciones criminales escindidas del capo que se hacen llamar PEPES (perseguidos por Pablo Escobar).

En los PEPES se aglutinó el mundo del narcotráfico que había desertado de la guerra total de Escobar, entendiendo que la alianza con el Estado los protegería de la extradición. Así, tras la muerte de Escobar (diciembre 1993) a esta galaxia para/criminal se le dio oportunidad de reivindicarse en otra nueva guerra, en este caso, contra las guerrillas, reinventándose ahora bajo un improvisado discurso anticomunista. En 1994 los antiguos PEPES se transformaron en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) para aplicar a escala global una experiencia local y pionera de paramilitarismo que en 1982 había nacido en Puerto Boyacá y había logrado hacerse, mediante el terror, con la región del Magdalena Medio (García, 2009). Las AUC funcionaron como ejército paramilitar, organizadas en Bloques, con verticalidad de mando y Estado Mayor. Operaban en estrecha alianza con las Brigadas y Batallones locales de las FFAA, quienes los adiestraban

³² La carta de Marulanda es esencialmente un reclamo de respeto y un recuento de agravios históricos desde la época de Marquetalia. Reprocha al “establecimiento político” que jamás haya pedido perdón, no haya reconocido la legitimidad de sus demandas y los haya criminalizado llevándoles guerra en vez de escuelas.

y monitoreaban y con quienes mataban juntos. Y políticamente estuvieron al servicio de, e influyeron en, las cúpulas políticas departamentales. Salvo algunos de los fundadores, como S. Mancuso, Tovar Pupo o E. Báez, las AUC estaban dirigidas por narcotraficantes puros, Don Berna o los Castaño antiguos subalternos de Escobar, Macaco mafioso de Pereira, Giraldo cacique narco de la Guajira. Desde el comienzo de la presidencia de Uribe en 2002, percibido como protector paramilitar, la mayoría de las organizaciones del crimen organizado acabaron integrándose al paramilitarismo, comprando franquicias a las AUC, vistiendo a su gente de uniforme y siendo reconocidas como nuevos Bloques. Fue el caso de Gordolindo en Cali (jefe del Bloque Pacífico), Miguel Arroyave (Bloque Capital), los Mejía Múnera, o los Buitrago en los Llanos, haciendo de las AUC en el más potente cartel del narcotráfico colombiano.

Por su parte las FARC encontraron en la hoja de coca y el clorhidrato su sustento financiero. Replegadas hacia regiones cada vez mas periféricas donde el campesino había normalizado su cultivo, establecieron el monopolio en la compra de pasta base o directamente cobraron impuestos de los narco laboratorios que operaban en sus zonas de influencia, en lo que fue conocido como el *gramaje*.

En diez años el paramilitarismo, en esencia una alianza no reconocida del Estado con el narcotráfico, se había convertido en un ejército de sicarios que se extendió por toda Colombia y cumplió su función al desalojar a las FARC de antiguos enclaves de alto valor productivo (petróleo en el Magdalena Medio, ganadería extensiva en Córdoba y Bolívar o vergel agroindustrial en Urabá). Cambiaron el mapa político del país rompiendo el binomio liberal /conservador³³, se apropiaron de cuatro millones de hectáreas³⁴, provocaron tres millones de desplazados por la violencia³⁵ y otra vez bajo la modalidad del holocausto rural quitaron la vida a cien mil personas, dejando en la memoria del horror persistentes símbolos como Chengue, El Aro, Mapiripán, Urabá o Montes de María. En 2006 el Congreso colombiano pretendió cerrar el episodio paramilitar con una ley (Ley de Justicia y Paz 975) que buscaba desmontar su estructura

³³ La alianza entre mafiosos, jefes paramilitares, viejas oligarquías, empresarios y políticos emergentes han reconfigurado un nuevo mapa regional de Colombia. Véase Gustavo Duncan (2006) y Claudia López y Mauricio Romero (2007).

³⁴ Estimaciones de Eduardo Pizarro Leongómez, presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (en *Cambio* N° 72, 2008).

³⁵ Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Informe 2007.

organizacional pero que era extremadamente benevolente con los victimarios y poco empática con las víctimas. Treinta mil sujetos armados se desmovilizaron, 3.284 de los cuales se acogieron a los beneficios legales y solo se instruyó proceso a 731. Por su parte el Movimiento Nacional de Víctimas ha señalado que con la Ley 975 difícilmente habrá verdad y reparación, lo primero porque los encausados no están obligados a decir todo lo que saben (solo admitir o negar aquello que la fiscalía conozca) y lo segundo porque las tierras expropiadas son hoy propiedad de empresas agroindustriales, fundamentalmente ligadas a la palma africana, que una compleja ingeniería notarial acreditan la legalidad de sus títulos³⁶.

Pero lo esencial es que el fin de las macro estructuras paramilitares no ha significado el fin del paramilitarismo ni mucho menos de la violencia. Al contrario la violencia se ha hecho más impredecible al atomizarse las organizaciones y enconarse las disputas territoriales por el control del trasiego de droga, el menudeo o la extorsión. En ciudades como Cali o Medellín el crimen ha echado raíces y lleva 25 años de endemismo. En Cali ocho grandes clanes se hacen la guerra subcontratando a su vez a una centena de pandillas que trabajan bajo lealtades volátiles, con una estimación de cien mil armas circulando en la ciudad y 1845 homicidios el 2011. En Medellín unas 250 pandillas, radicadas sobre todo en las comunas del norte y enfrascadas en una anómica guerra territorial estallada en 2007, han elevado los homicidios un 50% en los últimos cuatro años, saldándose el 2011 con dos mil asesinatos.

Por su parte en la mayor parte del campo sigue imperando la ley del plomo, la población ha sido disciplinada mediante la violencia y ha aprendido a sobrevivir en el cambiante código de los señores al mando. La coca, como siempre se sigue sembrando, los laboratorios de procesado están activos y una explosión minera en los últimos años, en su formato de minería ilegal, ha venido a sumarse como recurso para los grupos armados. La gente vive bajo variados dominios siempre cambiantes, que hoy pueden ser las FARC y mañana cualquier organización armada heredera de las AUC. Un informe de Indepaz señala que el paramilitarismo centralizado ha derivado en cuarenta bandas autónomas (BACRIM, o bandas criminales) a las que se estima unos trece mil efectivos, con

³⁶ “Declaración pericial de Iván Cepeda Castro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 16/1/2007.

presencia en el treinta por ciento de los municipios del país y con nombres como Rastrojos, Urabeños, Paisas, Águilas Negras o Erpac³⁷.

Es una paradoja, no contradicción, que en Colombia la violencia desnuda que disciplina a millones conviva con segmentos que se despliegan en un mundo mucho más cosmopolita. O que el modelo económico-empresarial del país encuentre en la devastación de la guerra oportunidades de maximización en concentración y beneficios³⁸. Que los que aspiran al poder hagan de ella un instrumento siempre disponible para sus carreras. Y que no sea un obstáculo, al contrario, para tejer relaciones de alcance estratégico con las potencias atlánticas, especialmente EEUU, que afianzan el statu quo. Paradoja que habría que tener en cuenta pensando en el futuro de México.

BIBLIOGRAFÍA

Astorga, L. (2003): *Drogas sin Fronteras*, México, Grijalbo.

Astorga, L. (2007): *Traficantes y Militares. El poder y la sombra*, México, Tusquets.

Azaola, E. (2012): “Violencia de hoy, violencias de siempre”, *Nexos*, [http://www.nexos.com.mx/?P=porautor&Autor=Elena Azaola](http://www.nexos.com.mx/?P=porautor&Autor=Elena+Azaola), (1/V/2012).

Bowden, C. (2010): *Murder City: Ciudad Juárez and the Global Economy's New Killing Fields*, New York, Nation Book.

Braun (2004). “Aves de corral, toallas, whisky... y algo más. Colombia: entre el recuerdo y el olvido”, *Revista Número*, Nº 38, 2004. Separata especial.

Campos, G., F. Borda y U. Luna (1962): *La Violencia en Colombia: estudio de un proceso social*, 2 vols. Bogotá.

Castañeda, J. (2011): *Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos*, México, Aguilar.

Cruz, F. (2011): *Tierra Narca*, México, Temas de Hoy.

Del Bosque, (2012): “El lugar más peligroso de México”. *Nexos*, <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102684>, (1/V/2012).

Duncan, G. (2006): *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*, Planeta, Bogotá.

³⁷ Indepaz: *Sexto informe sobre presencia de grupos narco paramilitares. Primer semestre 2011*. Bogotá, octubre 2011.

³⁸ Felix Howald (2001) ha señalado cómo la persistencia de la violencia afecta fundamentalmente a las PYMES, no así a los conglomerados agro-industriales.

- Escalante, F. (2009): “¿Puede México ser Colombia? Violencia, narcotráfico y Estado”, *Nueva Sociedad*, nº 220.
- Escalante, F. (2011): “La muerte tiene permiso. Reacciones y reflexiones”, *Nexos* Nº 397.
- García, A. (1996): *Hijos de la Violencia. Campesinos de Colombia sobreviven a golpes de paz*, Madrid, La Catarata.
- García, A. (2009): “Colombia y sus guerras” en Alejandro García (ed.): *Los crímenes de Estado y su gestión. Dos experiencias postraumáticas y una aproximación a la justicia penal internacional*, Madrid, La Catarata.
- Gómez, J. A. (2002): *Gobierno y casinos. El origen de la riqueza de Abelardo L. Rodríguez*, Mexicali, UABC.
- González, P. (2003): *Caracterización de la Población Fármaco Dependiente en Baja California*, Mexicali, UABC e Instituto de Salud Mental del Estado de Baja California.
- Grayson, G. y S. Logan (2012): *The Executioner's Men: Los Zetas, Rogue Soldiers, Criminal Entrepreneurs, and the Shadow State They Created*, New York, Transaction Publisher.
- Guerrero, E. (2010): “Narcotráfico SA”, *Nexos*, (1/I/2010).
- Guerrero, E. (2012): “2011. La dispersión de la violencia”, *Nexos*, <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102543> (1/II/ 2012).
- Howald, F. (2001): *Obstáculos al desarrollo de las Pyme causados por el Estado*, Bogotá, Fundes.
- Human Right Watch (2011): *Ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México*, Human Right Watch.
- Jusidman, C. y H. Almada (2007): *La Realidad Social de Ciudad Juárez* (2 vol.), Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Knight, A. (1996): “México bronco, México manso: una reflexión sobre la cultura cívica mexicana”, *Política y Gobierno*, volumen III, Nº 1, México.
- Knight, A. (2002): “La violencia política en el México post-revolucionario” en K. Koonings y D. Kruijt (ed.): *Las sociedades del miedo. El legado de la guerra civil, la violencia y el terror en América Latina*, Universidad de Salamanca.
- López, C. y M. Romero (2007): *Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, Bogotá, Nuevo Arco Iris.
- Mendoza, N. (2009): *Conversaciones del desierto*. México, CIDE.
- OCDE (2011): *Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising*, OCDE.

- Pérez, A. L. (2012): "Jalisco, la silenciosa disputa del narco", *Contralínea*, nº 279.
- Reguillo, R. (2011): "Juventud en exequias: violencias, precarización y desencanto", *Conspiratio*, nº 14.
- Reveles, J. (2008): *Las historias más negras de narco, impunidad y corrupción en México*, México, Random House Mondadori.
- Rodríguez, S. (2012a): *La Fábrica del Crimen*, México, Temas de Hoy.
- Rodríguez, S. (2012b): "Los periodistas somos un factor de resistencia en Juárez", *Clarín*, 16/3/2012.
- Segato, R. L. (2004): *Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado: la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez*, Departamento de Antropología, Universidad de Brasilia.
- Sierra, J. S. (2003): *El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México*, México, Plaza y Valdés.

Recibido: 3 de septiembre de 2013

Aceptado: 15 de octubre de 2013

Alejandro García estudió en la Universidad de Barcelona y actualmente es profesor de historia en la Universidad de Murcia. Ha sido profesor visitante en universidades de Francia, México, Colombia, Argentina, Costa Rica y ha desarrollado investigaciones en la Sierra Tarahumara y la Frontera Norte (México), Buenos Aires, Magdalena Medio (Colombia), Argelia, Mauritania y Sahara Occidental, entre otros lugares. Ha publicado *Civilización y Salvajismo en la Colonización del Nuevo Mundo* (1987), *Argentina en Crisis. Notas y documentos sobre una época de violencia política* (1993) *Hijos de la Violencia. Campesinos de Colombia sobreviven a golpes de paz* (1996), *Historias del Sahara. El mejor y el peor de los mundos* (2001), *Los crímenes de Estado y su gestión. Dos experiencias postraumáticas y una aproximación a la justicia penal internacional* (2009), *Historia del Sahara y su conflicto* (2010), alexg@um.es